

**NOMENCLATURA** : 1. [40]Sentencia  
**JUZGADO** : 23° Juzgado Civil de Santiago  
**CAUSA ROL** : C-23879-2019  
**CARATULADO** : FISCO DE CHILE/AGUILERA

**Santiago, nueve de junio de dos mil veinte.**

**Vistos.**

A folio 1, comparece doña Ruth Israel López, abogada Procuradora Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, Corporación de Derecho Público, por el FISCO DE CHILE, ambos domiciliados en Agustinas 1687, Santiago, Región Metropolitana, e interpone demanda de indemnización de perjuicios, en juicio sumario, en contra de don ÁNGEL RICARTE AGUILERA BRAVO, de quien desconoce profesión u oficio, con domicilio en El Clavecín N°788, Maipú, Región Metropolitana; a objeto que se le condene al pago de una indemnización al Fisco de Chile, ascendente a la suma de \$44.967.751.- (cuarenta y cuatro millones novecientos sesenta y siete mil setecientos cincuenta y un pesos), que corresponde al monto defraudado, originada por su acción fraudulenta en perjuicio de Carabineros de Chile, más reajustes, intereses y costas.

A folio 15, consta haberse notificado al demandado, a través de la notificación personal subsidiaria conforme lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

A folio 27, previa incidencia planteada por el demandado, se sustituyó el procedimiento, continuándose éste conforme al juicio ordinario

A folio 36, se tuvo por contestada la demanda, confiriéndose traslado para replicar.

A folio 40 se tuvo por evacuada la réplica y se confirió el traslado para duplicar.

A folio 45, teniéndose por evacuada la dúplica en rebeldía, se citó a las partes a audiencia de conciliación, la que no prosperó, atendida la inasistencia de la parte demandada a la misma, como consta a folio 51.

A folio 53, se recibió la causa a prueba por período legal correspondiente, fijándose los hechos substanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales ésta debió recaer, interlocutoria que fue objeto de recursos de reposición y apelación por la parte demandante, rechazándose el primero y concediéndose la apelación ante la Illma. Corte de Apelaciones de Santiago, como consta a folio 57.

A folio 71 se citó a las partes a oír sentencia.

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**



«RIT»

Foja: 1

**Primero:** Que doña Ruth Israel López, Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, Corporación de Derecho Público, por el FISCO DE CHILE, e interpone demanda de indemnización de perjuicios, en juicio sumario, en contra de don ÁNGEL RICARTE AGUILERA BRAVO, a objeto que se le condene al pago de una indemnización al Fisco de Chile, ascendente a la suma de \$44.967.751.- (cuarenta y cuatro millones novecientos sesenta y siete mil setecientos cincuenta y un pesos), que corresponde al monto defraudado, originada por su acción fraudulenta en perjuicio de Carabineros de Chile, más reajustes, intereses y costas.

En los hechos, señala que entre los años 2006 y 2017 funcionarios públicos adscritos a distintos estamentos y departamentos de Carabineros de Chile, a quienes correspondía, entre otras tareas, la custodia de caudales públicos de dicha institución, formaron una organización criminal para sustraerlos o consentir que otros terceros imputados los sustraieran, abusando de las facultades de custodia y administración que ejercían en sus respectivos cargos y funciones, aprovechándose de sus distintas posiciones, conocimientos especiales e información relevante, que tenían en razón de los cargos que ejercían en la Institución, lo que además les permitió eludir por años los controles internos y externos sobre tales recursos públicos. Asimismo, en estos hechos también intervinieron civiles imputados que, conociendo la calidad de funcionarios públicos y las funciones que ejercían sus coimputados, y concertados con éstos, facilitaron los medios para que se concretara la sustracción de caudales públicos por una suma total que a la fecha asciende a \$28.348.928.198 (veintiocho mil trescientos cuarenta y ocho millones novecientos veintiocho mil cientos noventa y ocho pesos). Funcionarios públicos y civiles fueron formalizados en causa RUC 1601014175-7 del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, y con fecha 17 de mayo de 2019, en causa RIT 16.286- 2018 y RUC 1800874988-0, se procedió a dictar sentencia condenatoria en juicio abreviado en contra de 14 de los 51 acusados, dentro de los cuales se encuentra don Caín de la Cruz Sáez Reyes, en calidad de autor por el delito de malversación de caudales públicos y lavado de activos, en los siguientes términos: “Los imputados funcionarios públicos desempeñaban sus cargos en el edificio institucional denominado “Edificio General Norambuena”, ubicado en calle Amunátegui N° 519 de esta ciudad que alberga, entre otras, las oficinas de la Dirección de Finanzas, conformada por los siguientes cuatro Departamentos: - Depto. I Presupuestos y Finanzas. - Depto. II Normas, Procedimientos y Controles Específicos. - Depto. III Tesorería y Remuneraciones. (Actual Tesorería Institucional) - Depto. IV Contabilidad y Finanzas. En este contexto, la forma de operar diseñada e implementada por la organización, a través de distintas modalidades, se componía de las siguientes fases o etapas: 1) Identificación de vulnerabilidades o debilidades en la implementación de controles internos al interior de la institución, relacionados con la disponibilidad financiera. 2) Análisis de los recursos o caudales susceptibles de ser sustraídos. 3) Planificación y elaboración de maniobras informáticas, financieras y/o contables, a través de las cuales poder sustraer dineros desde cuentas institucionales de carabineros de Chile, implementando sistemas vulnerables a



«RIT»

Foja: 1

manipulaciones o vulnerando los sistemas de control existentes, falsificando instrumentos públicos y privados, alterando registros contables, entre otras maniobras encaminadas a la concreción de los fines ilícitos de la organización criminal. 4) Identificación de personas que ocupen cargos o desempeñen funciones útiles para llevar a cabo las maniobras descritas, tendientes a la concreción de los fines de la organización criminal, incluyendo el reclutamiento de testaferros que faciliten la ejecución de dichos fines. 5) Ejecución del plan criminal mediante la realización de maniobras y actos de sustracción de caudales públicos desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile, a través de distintas modalidades. 6) Fraccionamiento y distribución de parte del dinero sustraído: Los receptores de los montos sustraídos debían fraccionar y distribuir el dinero entre miembros de la organización, mediante la emisión y entrega de cheques en blanco, transferencias bancarias, depósitos, vale vista o retirando el dinero de las cuentas para luego entregarlo en efectivo. 7) Realización de inversiones con las ganancias ilícitamente obtenidas, además de la constitución y/o utilización de personas jurídicas. Los miembros de la organización ocultaban o disimulaban el origen ilícito de los bienes o los bienes en sí mismos producto de la malversación de caudales públicos, para lo que utilizaban diversas formas tales como; adquirir inversiones a nombre propio o de terceras personas, realizar un proceso de estratificación de los montos, entre otros. 8) Identificación y captación de personas que pasarían a sustituir en sus funciones a los miembros de la organización criminal que dejaran de formar parte de la misma o de la institución de Carabineros de Chile, asegurando de esta manera la permanencia en el tiempo y la continuidad en el funcionamiento de la misma.

Refiere que dentro de este esquema de operaciones, y de forma particular el demandado, suministró medios e instrumentos, luego de ser reclutado por diferentes miembros y/o líderes de la organización criminal investigada en causa RUC 1601014175-7, y/o imputados reclutados directa o indirectamente por éstos, poniendo sus productos bancarios personales a disposición de los miembros de la referida organización criminal, para que se llevaran a cabo actos de sustracción de caudales públicos desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile, del modo siguiente: El demandado, Ángel Ricarte Aguilera Bravo, civil que sin ser parte de Carabineros de Chile, operando como testaferro del imputado MARIO YERKOVIC MATUS (reclutado por JOSÉ FERNANDO INAPAIMILLA acusado en causa RUC 1601014175-7), permitió la utilización de su cuenta vista N° 43562657070 del Banco Estado por parte de miembros de la organización criminal a la que INAPAIMILLA pertenecía, para recibir abonos, por un monto total de \$44.967.751 pesos, en al menos 02 ocasiones, el 29 de agosto de 2012 y 13 de septiembre de 2013. Dichos dineros provenían de la cuenta contable institucional de Carabineros, denominada "Fondo Desahucio" N° 9018158, según el siguiente detalle: N° cuenta pagadora Tipo de pago N° cuenta destinataria Tipo de cuenta Fecha Monto Fondo Desahucio (N° 9018158) Transferencia 43562657070 Vista 29/08/12 \$21.322.250 Fondo Desahucio (N° 9018158) Transferencia 43562657070 Vista 13/09/13 \$23.645.501 MONTO TOTAL ACUMULADO \$44.967.751.



«RIT»

Foja: 1

Asimismo, indica que luego de recibir ilícitamente los referidos fondos públicos en su cuenta, ANGEL AGUILERA BRAVO acompañado de MARIO YERKOVIC realizó millonarios retiros de dinero desde la cuenta vista antes referida, para entregárselos posteriormente en efectivo al imputado YERKOVIC MATUS. Lo anterior, con el objeto de que dichos fondos fueran puestos a disposición de miembros y líderes de la organización criminal conforme a los mecanismos de recolección y redistribución de fondos establecida por ésta.

Expone que el demandado, a sabiendas que determinados dineros o bienes procedían directa o indirectamente de la comisión de una serie de hechos típicos y antijurídicos mencionados en el artículo 27 de la ley 19.913, ocultó o disimuló su origen ilícito y los bienes en sí mismos que provenían de dichos delitos. Para conseguir su objetivo, realizó diversas maniobras que le permitieron desvincular de forma progresiva el dinero desde su fuente ilícita. Es así como los imputados con el dinero generado en los delitos base, lograron introducirlo al sistema económico financiero, vulnerando todos los controles del sistema preventivo en materia de lavado de dinero. Los dineros fueron posteriormente sacados de manera fraccionada por los imputados desde sus cuentas bancarias personales, para ser posteriormente entregados al imputado INAPAIMILLA o a otros imputados reclutados por él, mediante la realización de depósitos, la emisión de cheques firmados en blanco y de vale vista, así como la realización de diversas transferencias y giros de dinero, ya sea de forma íntegra o fraccionada, dejando un porcentaje de ganancia en la cuenta receptora del imputado testaferro. Lo anterior, según instrucciones del acusado JOSE INAPAIMILLA o imputados reclutados por este, quienes en el marco de un mecanismo de recolección y redistribución de dineros previamente establecido por la organización criminal de causa RUC 1601014175-7 (de la cual el imputado JOSE INAPAIMILLA formaba parte), fueron destinatarios de fondos públicos de manera indirecta, con el objeto de no levantar las alertas del sistema preventivo en materia de lavado de dinero, logrando desvincular progresivamente el dinero desde su fuente ilícita, al ingresar finalmente al patrimonio de personas que no se encontraban vinculadas directamente con la cuenta receptora de fondos malversados, desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile. Los actos de lavado de dinero realizados por los demandados, de posterior entrega y/o distribución de dinero a distintos miembros de la organización ya sea mediante cheques firmados en blanco, depósitos, transferencias bancarias o entregas en efectivo en domicilios particulares, en la vía pública y oficinas institucionales señala la sentencia.

En conclusión, sostiene que en dicho proceso penal se ha establecido la participación del demandado en carácter de autor de delito de malversación de caudales públicos y de autor del delito de lavado de dinero, poniendo sus productos bancarios personales a disposición de los miembros de la referida organización criminal, para que se llevaran a cabo actos de sustracción de caudales públicos desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile. Así el monto de la sustracción -siendo la misma el



«RIT»

Foja: 1

perjuicio causado al Fisco- que se atribuye al demandado, corresponde a la suma de a lo menos \$44.967.751 (cuarenta y cuatro millones novecientos sesenta y siete mil setecientos cincuenta y un pesos).

Reseña que la sentencia condenatoria de fecha 18 de junio de 2019, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en la causa RIT 16.286-2018 y RUC 1800874988-0, se encuentra firme y ejecutoriada con fecha 25 de julio de 2019; condenándose al demandado individualizado, en calidad de autor de los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, respectivamente a la pena de QUINIENTOS CUARENTA Y UN DIAS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MEDIO, multa de ONCE UTM y accesoria de suspensión de cargo y oficio público durante la condena; y a la pena de SESENTA Y UN DIA DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÍNIMO, más multa de TREINTA UTM y accesoria de suspensión de cargo y oficio público durante la condena.

En cuanto al derecho, asevera que tratándose de un perjuicio fiscal derivado de la comisión de un ilícito penal, y habiéndose preparado la demanda civil en sede penal, para perseguir la responsabilidad civil del demandado se deben observar las reglas que para estos casos contemplan tanto la legislación civil como la ley procesal penal vigente en nuestro país

Los hechos referidos en esta presentación sin lugar a dudas configuran, además del delito penal por el que se le condenó, un delito civil por cuya comisión ha nacido para su autor la obligación de indemnizar los daños causados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1437 y 2314 y siguientes del Código Civil, ya que entre las infracciones y el daño producido, existe la relación de causa-efecto exigida por la ley para determinar la responsabilidad de la demandada. Concurren en la especie el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, que permite hacer valer dicha sentencia condenatoria penal en este juicio civil.

En consecuencia, señala que los delitos cometidos por el demandado civil tuvieron como resultado un perjuicio al Fisco que asciende a \$44.967.751.- (cuarenta y cuatro millones novecientos sesenta y siete mil setecientos cincuenta y un pesos), suma por la cual se demanda, dineros que el demandado está obligado a restituir, conforme lo disponen los artículos 2314 y 2329 del Código Civil.

Finalmente, respecto de la indemnización de los perjuicios, señala el Código Penal en su artículo 24 y el Art. 3° N° 9 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado,

Previas citas legales, pide tener por interpuesta demanda en juicio sumario en contra de don Ángel Ricarte Aguilera Bravo, ya individualizado, acogerla y en definitiva se declare:

1.- Que se condena al demandado a pagar al Fisco de Chile la suma de \$44.967.751 (cuarenta y cuatro millones novecientos sesenta y siete mil setecientos



«RIT»

Foja: 1

cincuenta y un pesos), que corresponde al monto defraudado, originada por su acción fraudulenta en perjuicio de Carabineros de Chile.

2.- Que la suma anterior se pagará con el reajuste experimentado por el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha en la cual se cometió el delito y la del pago efectivo; o en subsidio desde la fecha que el tribunal determine y también hasta el momento de su pago efectivo.

3.-Que se condene al pago de los intereses corrientes sobre el capital reajustado, calculados desde que el demandado se constituya en mora y hasta su pago efectivo. Y

4.- Que se condene al demandado a pagar las costas de la causa.

**Segundo:** Que encontrándose legalmente emplazada, la parte demandada se apersonó en el juicio y contestó la demanda, luego de promover un incidente de sustitución del procedimiento.

En cuanto a los hechos, indica que la demandante sustenta su acción en sentencia dictada con fecha 18 de junio de 2019, en causa RIT 16.286-2018, RUC 1800874988-0, sentencia de juicio abreviado pronunciada por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, la cual se encuentra ejecutoriada.

Refiere que el demandado está siendo perseguido en estos autos, respecto su responsabilidad patrimonial, por un monto de \$44.967.751.-, que le resulta absolutamente desproporcionado y muy superior al perjuicio efectivamente sufrido por el demandante, con ocasión de los actos que pudo realizar.

Además, indica que don Ángel Ricarte Aguilera Bravo Y Mario Alexis Yerkovic Matus se encontraban realizando trabajos de pintura en la casa de don José Fernando Inapaimilla, cuando este último se acerca a su representado para ofrecerle un negocio, el cual consistía en prestar su cuenta de ahorro para recibir un depósito de dinero y retirarlo de forma íntegra en efectivo para ser entregado al dueño de casa, recibiendo una comisión de \$300.000.- por cada depósito. Si bien efectivamente el demandado de autos recibió en dos ocasiones depósitos a su cuenta de ahorro, el 28 de agosto de 2012 por la suma de \$21.322.250.-, y el 13 de septiembre de 2013 por la suma de \$23.645.501.-, en ambas ocasiones asevera que el Sr. Aguilera Bravo concurrió junto a don Mario Alexis Yerkovic Matus para retirar el dinero depositado en la cuenta, para entregárselo a este último, y así ponerlo a disposición de don José Fernando Inapaimilla Vergara, quien es la persona que efectivamente percibió los montos indicados y se benefició del ilícito cometido.

Hace presente lo que considera un hecho público y notorio en atención a que su representado nunca tuvo la intención de apropiarse de dichos dineros, siendo catalogado como "testaferro" en el proceso penal, ya que su participación se limitaba a girar las sumas de dineros depositados en su cuenta de ahorro para entregárselo a un tercero reclutador, quién finalmente ponía el dinero a disposición de los miembros de la organización criminal. Es decir, estima que su representado no se apropió de los dineros



«RIT»

Foja: 1

que se demandan, no se hizo más rico por el ilícito, y no fue quien generó el daño al demandado en los términos alegados. Es más, cabe agregar que los pocos bienes que tiene su representado fueron obtenidos con mucha antelación a las fechas que se indican en la causa penal, fueron pagados con créditos y dineros provenientes del trabajo de éste. Así las cosas, considera que el perjuicio alegado por la demandante, no proviene del actuar de don Ángel Aguilera Bravo ni por el beneficio que éste pudo tener al momento de participar del ilícito penal, por lo que la acción de autos se sustenta en la sola participación de este último, y no respecto del daño o perjuicio que pudo o no ocasionarse en el patrimonio del demandante, como pretende en la acción de autos.

Finalmente, sostiene que el procedimiento abreviado autoriza al Ministerio Público a negociar con el imputado, siendo ambos beneficiados; por una parte, el Ministerio Público obtiene colaboración con la investigación y el imputado una rebaja en la pena que se le pretende aplicar. Es por esto que considera que la aplicación del artículo 178 del Código de Procedimiento Civil es errónea, pudiendo sólo aplicarse a la sentencia el valor de una confesión extrajudicial según dicta el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil, sirviendo de base para una presunción judicial. En este sentido, expone que el que su representado haya aceptado un juicio abreviado, la respectiva sentencia solo conlleva la aceptación del hecho ilícito, por lo que el demandante debe acreditar en autos la ocurrencia del daño patrimonial, su quantum y la causalidad directa entre el ilícito y el daño, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 2314 y siguientes del código Civil, ya la culpa penal y civil no siempre convergen per se.

En lo que respecta a la indemnización de perjuicios, luego de hacer referencia a los requisitos que contempla la responsabilidad civil extracontractual, sostiene que no existe relación de causalidad entre la acción ejecutada por su representado y el daño o perjuicio que alega y persigue reparar el actor, por lo que cualquier monto al que se pudiera condenar, debe ser proporcional al daño que efectivamente éste pudo ocasionar, y que ha de ser probado por el demandante.

Agrega que el perjuicio alegado por la contraria, proveniente del actuar de su representado no es el que se demanda bajo ninguna circunstancia; esto porque siendo el mismo actor quien reconoce que su representado sólo fue un estafeta dentro de la organización, y que los dineros que se indican, sólo “pasaron” por la cuenta facilitada por éste, razón por la cual, no existe un daño en los términos expresados, con ocasión del actuar de don Ángel Aguilera y que además deba ser reparado por éste como se pretende.

En el mismo razonamiento, expone que el demandante de autos no aporta antecedentes objetivos que permitan determinar el daño material que alega, así como su nexos con el actuar de su representado.

Al respecto, sostiene que en la demanda de autos el actor al describir los daños que habría sufrido, sólo se limita a hacer una avaluación del monto de éste, sin aportar antecedentes que indiquen sin duda alguna, que el perjuicio alegado es producto del



«RIT»

Foja: 1

actuar inexcusable y exclusivo de su representado, dentro de la organización ilícita de la que lamentablemente formó parte. De esta forma, estima que para realizar una evaluación objetiva de los daños, se debe hacer una relación causal entre los hechos efectivamente causados por el demandado, y el perjuicio o daño sufrido por el actor, lo que ahonda con jurisprudencia atinente.

En virtud de los argumentos expuestos, solicita que se rechace en todas sus partes la demanda deducida en autos, a menos que proceda acreditar la ocurrencia del daño patrimonial, su quantum, y la causalidad directa entre el ilícito y el daño alegado por la demandante, respecto del actuar de su representado, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 2314 y siguientes del código Civil. En subsidio de lo anterior, y para el improbable caso que se acoja parcialmente la demanda, pide que se rebaje la cuantía al monto del perjuicio efectivamente causado o al monto que el tribunal determine en derecho, conforme a la prueba que se aporte en juicio de forma debida, con condena en costas.

**Tercero:** Que la acción interpuesta en autos corresponde a la de indemnización de perjuicios, conferida a la persona que ha sufrido daño producto de un delito o cuasidelito, o a su heredero, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2314 y 2315 del Código Civil, y tramitada de conformidad a las normas del procedimiento ordinario ( en el caso de marras), previstas en los artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y conforme a lo dispuesto en el artículo 68 del Código de Procedimiento Penal.

**Cuarto:** Que el derecho a la indemnización que dice haber sufrido el actor y cuyo reconocimiento demanda, debe determinarse con arreglo a las normas del derecho común. De esta manera, para determinar si procede o no declarar el derecho que se demanda, se requiere que el autor de los daños sea capaz de delito o cuasidelito; que exista un hecho culposo o un cuasidelito propiamente tal, que sea imputable a la parte demandada; que este hecho culposo haya causado un perjuicio o daño a la parte demandante; que entre el hecho doloso o culposo y el perjuicio producido haya una relación de causalidad, esto es, que los daños o perjuicios sufridos por la víctima sean una consecuencia inmediata y directa de aquél.

**Quinto:** Que de acuerdo al mérito de las acciones y defensas esgrimidas por las partes en sus escritos del período de discusión, la litis quedó configurada de modo tal que las partes debieron allegar al proceso las probanzas correspondientes, a fin de acreditar los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Efectividad de haberse verificado los hechos sobre los que hace consistir el actor el daño patrimonial que demanda; 2.- Efectividad que el demandado puso a disposición de terceros los montos recibidos en su cuenta vista; 3.-Existencia de un beneficio pecuniario a título personal para el demandado. Hechos y circunstancias que lo acrediten; 4.- Existencia de un vínculo de causalidad entre los hechos señalados y los daños acontecidos al demandante; y 5.- Efectividad que a consecuencia de la conducta que le atribuye al demandado, la actora sufrió los perjuicios que relata en su libelo. En su caso, monto y naturaleza de los mismos.





«RIT»

Foja: 1

**Sexto:** Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, correspondía al actor acreditar íntegramente los fundamentos de su demanda, en especial, la existencia de un delito o cuasidelito civil cometido por el demandado, los daños sufridos y la relación entre los hechos ilícitos y los perjuicios.

**Séptimo:** Que la demandante, a fin de acreditar sus dichos, aportó al proceso los siguientes documentos: 1.- Copia simple de la sentencia dictada en juicio abreviado, de fecha 18 de junio de 2019, en causa RIT 16.286-2018 y RUC 1800874988-0, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago; 2.- Copia simple certificado de ejecutoria de la causa penal señalada en el número anterior, de fecha 25 de julio de 2019.; 3.- Copia simple de la anotación en el repertorio del Conservador de Bienes Raíces de Talca, de fecha 5 de junio de 2018, respecto del inmueble sujeto a medida cautelar real de prohibición de celebrar actos y contratos de propiedad de Ángel Ricarte Aguilera Bravo; 4.- Copia simple de la certificación de inscripción medida precautoria, de fecha 5 de junio de 2018, emitida por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, respecto del inmueble de propiedad de Ángel Ricarte Aguilera Bravo; 5.- Copia simple del estampado de notificación realizada por el receptor judicial don Jaime Muñoz Aravena al Conservador de Bienes Raíces Santiago, de fecha 1 de junio de 2018, respecto del inmueble sujeto a medida cautelar de propiedad de Ángel Ricarte Aguilera Bravo; 6.- Copia simple del estampado de notificación realizada por el receptor judicial don Héctor Carrillo Retamal al Conservador de Bienes Raíces Talca, de fecha 4 de junio de 2018, respecto del inmueble sujeto a medida cautelar de propiedad de Ángel Ricarte Aguilera Bravo; 7.- Copia simple de la inscripción de la medida cautelar real de prohibición de celebrar actos y contratos, de fecha 5 de junio de 2018, realizada por el Conservador de Bienes Raíces Talca, respecto del inmueble de propiedad de Ángel Ricarte Aguilera Bravo; 8.- Copia simple del Oficio N° 1697-2018, de fecha 15 de mayo de 2018, del señor Juez de Garantía del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, don Daniel Urrutia Laubreaux al Conservador de Bienes Raíces Santiago, comunicando la decisión de someter a medida cautelar real de prohibición de celebrar actos y contratos respecto del inmueble de propiedad de Ángel Ricarte Aguilera Bravo.

**Octavo:** Que por su parte, la demandada, acompañó, en defensa de sus alegaciones, la siguiente prueba instrumental: 1. Imágenes de cuenta de ahorro N°43562657070, Banco Estado, a nombre de Ángel Ricarte Aguilera Bravo; 2. Liquidaciones de sueldo, a nombre de Ángel Ricarte Aguilera Bravo; 3. Comprobantes de pago de dividendos, a nombre de Ángel Ricarte Aguilera Bravo; 4. Certificado de Información de créditos personales, a nombre de Ángel Ricarte Aguilera Bravo, emitido por CCAF de Los Andes; 5. Certificado de cotizaciones, a nombre de Ángel Ricarte Aguilera Bravo, emitido por AFP Habitat; 6. Certificado de Información de rentabilidad anual de los fondos de pensiones, a nombre Ángel Ricarte Aguilera Bravo, emitido por AFP Habitat; 7. Certificado de entrega de vivienda ubicada en calle Clavecín N°788, comuna de Maipú, a nombre de Ángel Ricarte Aguilera Bravo; 8. Copia de Compraventa de inmueble ubicado en Perquin Parcela 6, lote A 8-3, comuna de Talca; 9. Alzamiento



«RIT»

Foja: 1

de hipoteca y prohibición, del inmueble ubicado en Pasaje El Clavecín N°788, comuna de Maipú, a nombre de Ángel Ricarte Aguilera Bravo; 10. Factura de Constructora Tacora, a nombre de Ángel Ricarte Aguilera Bravo; 11. Informe Pericial Económico de Carpeta Investigativa, emitido por personal pericial de Fiscalía de Chile, de José Inapaimilla; 12. Informe de Remuneraciones y propiedades del coimputado en el delito José Inapaimilla; 13. Cartola Bancaria del Banco Estado, a nombre de don Ángel Ricarte Aguilera Bravo; 14. Cartola histórica de chequera electrónica, del Banco Estado, a nombre Ángel Ricarte Aguilera Bravo; 15. Sentencia condenatoria RIT 16.286-2019, RUC 1601014175-7. Del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, específicamente en el extracto que hace referencia a Ángel Ricarte Aguilera Bravo.

**Noveno:** Que, según da cuenta la copia autorizada de la sentencia dictada por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en la causa RIT 16.286-2019, RUC 1601014175-7; la que fuera allegada a estos autos y que será valorada de conformidad a los artículos 1700 y 1706 del Código Civil, en relación al artículo 342 N° 2 del Código de Procedimiento Civil; con fecha 18 de junio de 2019 efectivamente fue condenado el demandado por dos delitos, por una parte malversación de caudales públicos del artículo 233 número 3° del Código Penal y por el delito de Lavado de Activos del artículo 27 de la ley 19.913, participando en calidad de autor.

Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 68 del Código procesal Penal: *“Artículo 68.- Curso de la acción civil ante suspensión o terminación del procedimiento penal. Si antes de comenzar el juicio oral, el procedimiento penal continuare de conformidad a las normas que regulan el procedimiento abreviado, o por cualquier causa terminare o se suspendiere, sin decisión acerca de la acción civil que se hubiere deducido oportunamente, la prescripción continuará interrumpida siempre que la víctima presentare su demanda ante el tribunal civil competente en el término de sesenta días siguientes a aquél en que, por resolución ejecutoriada, se dispusiere la suspensión o terminación del procedimiento penal. En este caso, la demanda y la resolución que recayere en ella se notificarán por cédula y el juicio se sujetará a las reglas del procedimiento sumario. Si la demanda no fuere deducida ante el tribunal civil competente dentro del referido plazo, la prescripción continuará corriendo como si no se hubiere interrumpido.”*

Así, en los juicios civiles pueden hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al imputado, no siendo lícito en el juicio civil tomar en consideración pruebas o alegaciones incompatibles con lo resuelto en dicha sentencia o con los hechos que le sirvan de necesario fundamento, de manera que los hechos que se tuvieron por acreditados en dicha sede no pueden volver a discutirse en ésta, teniendo pleno valor probatorio la sentencia acompañada en dichos términos, lo que permite tener por fehacientemente acreditada en autos la forma en que ocurrió el ilícito, la responsabilidad -reconocida en la especie por la parte demandada como requisito de procedencia del procedimiento abreviado -, y la relación causal existente entre uno y otro hecho.



**Décimo:** Que habiéndose ya comprobado parte de los requisitos referidos en el considerando cuarto en la tramitación del procedimiento seguido ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, respecto de los puntos 1, 2 y 3, fijados por la interlocutoria de prueba dictada en autos, solo cabe a esta magistratura analizar la existencia de los perjuicios alegados, su naturaleza y la determinación de su monto.

**Undécimo:** Que como se viene razonando, el demandado fue condenado por sentencia firme del Juzgado de Garantía de Santiago como autor de dos delitos, a saber, malversación de caudales públicos del artículo 233 número 3° del Código Penal y el de lavado de activos del artículo 27 de la ley 19.913, participando en calidad de autor.

Que, como se advierte, estos ilícitos para su perpetración exigen la defraudación, conducta típica que supone un enriquecimiento ilícito en beneficio del hechor. En otras palabras, el fraude de marras requiere, además del engaño y la mala fe, que el Estado resulte perjudicado en su patrimonio.

**Duodécimo:** Que encontrándose acreditado el hecho del fraude, aceptado además, expresamente por el demandado, no es posible, en consecuencia, discutir en el presente juicio, la inexistencia de un daño al patrimonio fiscal, pues éste ya fue declarado en el juicio penal, desde que se trata de un hecho constitutivo del delito establecido en dicho proceso, y alterarlo, significaría desconocer los efectos de cosa juzgada que conlleva una sentencia penal ejecutoriada en materia civil.

**Décimo tercero:** Que de conformidad a lo anterior, no cabe duda que estamos frente a un ilícito del cual ha nacido para el demandado la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados por sus actos.

Así, el artículo 233 del Código Penal sanciona al “*empleado público que teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro, los substraiga o consintiere que otro los substraiga*”. Sanciona por tanto a quien en razón de su función tiene control sobre procedimientos o decisiones de la organización estatal (*intraneus*) y los ejerce fraudulentamente originándole pérdida o privándole de un lucro legítimo. La disposición exige por tanto la participación de un “empleado público”, quien en rigor es el único que puede ser autor del delito en sentido estricto.

No obstante, el legislador no sólo ha dispuesto la sanción penal a los autores de los delitos, sino también a determinados partícipes. Por otra parte, el artículo 15 del Código Penal ha extendido el tratamiento penal de la autoría a otros partícipes, que son considerados autores. En consecuencia, si bien quien carece de la calidad de empleado público (*extraneus*) no puede ser autor de la conducta descrita en el artículo 239 del Código Penal, nada impide que participe en ella, incluso de un modo que la ley pueda asimilar a la autoría, con las mismas consecuencias penales.

**Décimo cuarto:** Que por consiguiente y conforme se ha venido razonando, se acogerá la demanda, en cuanto el demandado deberá pagar al actor la suma de \$44.967.751.-



«RIT»

Foja: 1

Que la suma de dinero ordenada pagar por el demandado, deberá serlo reajustada conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, entre el mes anterior a la fecha de la presente sentencia y el mes anterior al de su pago efectivo. Que, asimismo, la suma en comento, deberá solucionarse con intereses corrientes a contar de la fecha que el demandado se encuentre constituido en mora.

**Décimo quinto:** Que las restantes probanzas no analizadas en forma pormenorizada, en nada altera lo que se ha venido razonando.

Y visto además lo establecido en el artículos 1698, 1699, 1701, 1702, 1706, 2314, 2315 y 2332 del Código Civil; artículos 144, 170, 178, 180, 255, 342, 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículos pertinentes del Código Penal, Ley 19.913 y artículo 68 del Código Procesal Penal, se declara:

I.- Que se acoge la demanda de folio 1, condenándose a Ángel Ricarte Aguilera Bravo a pagar al Fisco de Chile, la suma de \$44.967.751, la cual deberá serlo reajustada y con intereses, conforme a lo consignado en el motivo décimo cuarto de esta sentencia.-

II.- Que se condena en costas a la parte demandada.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Dictada por don LUIS EDUARDO QUEZADA FONSECA, Juez Suplente.

Autoriza doña Margarita Bravo Narváez, Secretaria Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, nueve de Junio de dos mil veinte.**

